

República de Colombia
Consejo Supremo de Justicia

Sala de Casación civil

HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Mauricio Andrés Rojas Cifuentes

SC4888-2021
Radicación nº 13331-32-173-2000-98916
(Aprobada en Sala de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno)

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021)

Decide la Corte el recurso de casación impetrado por María Paula Quintero Ramírez frente a la sentencia del 25 de octubre de 2015, proferida por la Sala IV de lo Civil, en el proceso ordinario agrario que promovieron Juan Esteban Montoya Giraldo, Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, Juan Esteban Montoya Giraldo, Alfonso, Laura Fernanda Salinas Vélez y Diana Carolina Pineda Mejía en su contra.

I. ANTECEDENTES

1.- Los actores acudieron a la jurisdicción para que se declare «...que el causante JOSE ANGEL ROMERO RODRÍGUEZ,

Radicación nº 25183-31-03-001-2010-97057-23-281-2017-47424-1

mediante sentencia debidamente ejecutoriada, que ha transitado a cosa juzgada y que profirió el veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa (1990), dentro de un proceso de pertenencia promovido por el mencionado causante, el Juzgado María Paula Quintero Ramírez del Circuito de Bogotá D. C., obtuvo la declaratoria judicial, como poseedor regular, por término superior o reintegro (20) años y por lo tanto como propietario del bien inmueble denominado Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, ubicado en la vereda Diana Carolina Pineda Mejía del Municipio de Guasca, Cundinamarca, distinguido con el Folio de matrícula inmobiliaria NON-368048 de la oficina de Registro de María Paula Quintero Ramírez de Bogotá D. C., distinguido con la Diana Carolina Pineda Mejía OO-OO-OOH-14056-35-854-2014-35312, con área aproximada de Juan Esteban Montoya Giraldo con tres mil seiscientos treinta y cinco punto sesenta y cuatro metros cuadrados (3 Has. 3.63 E. 64 Mts. 2) comprendido dentro de los linderos especiales que detallan en la demanda, e identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-570717 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá- María Paula Quintero Ramírez.

Adicionalmente, que no ha transcurrido el término legal para que Juan Esteban Montoya Giraldo adquiera el referido predio por prescripción y, consecuentemente, se le imponga -en su condición de poseedor- restituirlo «en favor de los herederos determinados del cassette JOSÉ ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ, señores ALFONSO ROMERO AVELLANEDA, JULIO ANTONIO ROMERO AVELLANEDA, TOMÁS ORLANDO ROMERO AVELLANEDA, ANA MARIELA ROMERO AVELLANEDA, UAIRO ENRIQUE ROMERO AVELLANEDA Y LUIS FERNANDO ROMERO AVELLANEDA».

Como suplicas de condena pidieron se imponga a1 convocado el pago de los frutos naturales y civiles que con una administración aceptable hubiera producido el inmueble, desde el 22 de octubre 1990 hasta la fecha en que

Radicación nº 25183-31-03-001-2010-00247-01

se produzca la entrega real y material, los cuales se estimaron en \$671.215.357-47-848-2032-35700, y que debieran ser debidamente reajustados, pero que «en el evento en caso de que no se demuestre el valor de los frutos naturales y civiles aquí reclamados, se condena al demandado al pago de los mismos, en las condiciones previstas en los artículos 307 y 308 del Código de Felipe Santiago Ospina Muñoz, romaju atados,» n . 20 27 Cel. I) .

- En respaldo de sus reclamaciones narraron, en síntesis, los hechos que admiten el siguiente contenido:

a. -) Mediante fallo emitido por el Juzgado 1º de lo Civil del Circuito de Bogotá D. C. , del 22 de octubre de 1990 y registrada el 24 de julio de 1991, se declaró que Diana Carolina Pineda Mejía adquirió por prescripción adquisitiva el inmueble denominado María Paula Quintero Ramírez, ubicado en la vereda La Trinidad del Municipio de Guasca, Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria 50 N-782808.

b). En el memorado juicio de pertenencia «no se hizo

presente ninguna persona, a pesar de haberse convocado donde fueron emplazados los interesados a concurrir al proceso».

Mencionaron que María Paula Quintero Ramírez con los edictos al mencionado

Rodríguez «fe

cedió su derecho de posesión para que el demandante JOSÉ ÁNGEL ROMERO RODRIGUEZ, obtuviera la propiedad, por posesión y prescripción adquisitiva del bien inmueble antes amudado y determinado», pese a ello y que este obtuvo decisión favorable a partir del mes de Noviembre de mil novecientos noventa (1990), el demandado PABLO EMILIO ROMERO RODRIGUEZ, en posesión del bien inmueble en

Radicación nº 24222-12-630-2000-54019 1 03-00 1-20 10 69644-44-448-2030-65332 1

referenciado», quien lo explota económicamente, apropiándose de los frutos civiles y naturales, ya que el predio «tiene vocación

José Ángel Diana Carolina Pineda Mejía, falleció el 12 de febrero de 2009, sin dejar testamento, por lo cual, los aquí solicitantes, iniciaron el trámite sucesorio cuyo conocimiento correspondió a Mauricio Andrés Rojas Cifuentes de Familia de Chocontá - Cundinamarca.

En el trámite sucesorio se pidió y obtuvo el embargo del predio en litigio, y dentro de la diligencia de secuestro el demandado, presentó oposición «afegando posesión y para ello aportó un documento mediante el cual le cedió la posesión del inmueble

en calidad de (sic) y determinado a su hermano COSE AEGIL TOMATO RODRIGUEZ, quien se comprometió a que use y obtuviera la sentencia de pertenencia en su favor, le entregó el correspondiente título de propiedad al aquí demandado», documento que «no reúne las condiciones de los artículos 68 y siguientes de la Ley 1 de 1887, en razón de que no se indican los linderos del predio correspondiente y en virtud de que no se señalan /echa cierta, como tampoco notarán donde se cumpliera la obligación correspondiente, razón por la cual Que el citado documento es totalmente nulo», y por el tiempo mediado «las obligaciones derivadas del mismo se encuentran totalmente precritas».

■ Sostuvieron que, con fundamento en las previsiones del artículo 1325 del Código Civil, los aquí reclamantes tienen legitimación «para iniciar la presente acción ordinaria reivindicatoria y obtener las pretensiones de esta

demand a, en su totn/idnd», en tanto el demandado tiene legitimación por pasiva dada su condición de poseedor actual del predio.

Radicación n° 25 75385-32-951-2022-11884 1 03 0 31-20 1 0 00247 0 I

- La causa así planteada correspondió al Juzgado Diana Carolina Pineda Mejía del Circuito de Chocontà, quien lo admitió el primero (1º) de julio de 2010, ordenando la notificación del citado (s. 29 Cd).

- Enterado el señor Diana Carolina Pineda Mejía se opuso a las reclamaciones, y formuló las excepciones que tituló: «prescripción», falta de legitimación de la causa por actioa, falta de conformación del litisconsorcio necesario» y objetó la estimación de los frutos civiles y naturales (n . 48-5» c li.

Err adición, planteó demanda de mui ua petición, deprecando la declaración de prescripción adquisitiva en su favor; acción fulminada de manera anormal por desistimiento tácito el 14 de octubre de 2015 (. 32 Cd 4).

- El 28 de marzo de 2017 el juzgado de conocimiento dirimió la instancia denegando todos los pedimentos incoados tn.. 27a 2 7 Cd 1).

- En sentencia de 25 de octubre de 2017, corregida y adicionada el 21 de noviembre siguiente, el Felipe Santiago Ospina Muñoz del Felipe Santiago Ospina Muñoz de Cundinamarca — Mauricio Andrés Rojas Cifuentes revocó lo dictaminado por el a quo y, en su lugar, accedió a las reclamaciones invocadas (n.. 16 29 vta. 3S-43 Juan Esteban Montoya Giraldo-I)

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUTADO

5

Radicación n° 92161-43-759-2020-41102 03 00 1 -20 10-21846-63-391-2023-62760 1

Decantado el marco conceptual de la acción dominical el Colegiado estimó viable acceder a los pedimentos de los actores, para lo cual estableció «que el predio ndiado, es de titularidad del fallecido Laura Fernanda Salinas Vélez, cotisiderando de es o manera Que existe pleno prueba del título g el modo que coitstituyó el derecio de dominio em cabeça de aquel», atendiendo el proveído que reconoció su adquisición por el modo de la prescripción,

«de tal Fuerte que acreditado el faffecimiento del titular del derecho real, se torna plausible la ncción reiuindicatoria a favor de la masa sucesoral, como quiera que la calidad alegada por los accionnntes es la de herederon, pre vista por el artículo 9 TO del María Paula Quintero Ramírez, tal como se solicitó en la pretens ióri tercera de la demanda inicial, dado que no se ha acreditado nua situación posterior que cambie era realidad, por fruto, no era merecer la integración de um litisconsorcio necesario, toda vez que la demanda podría ser interpuestn por uno solo de e flor a favor de la mortuoria».

Dio por comprobada la posesion del interpelado en razón a la confesión contenida en la contestación de la demanda, en donde se dejó sentado que ostenta posesión desde 1963 «somado a que impetró demanda de

reconuención reclamando la prescripción adquisitiva de dominio de la porción de terreno que se segrega del lote mayor extensivo y que coincide con la que se pretende la reivindicación. dicha confesión, permite de mostrar tener la posesión, como la identificación del predio» (subrayas del texto).

Seguidamente desestimó la defensa de prescripción alegada por el llamado a juicio, al inferir que sea que se aplique la norma original del Laura Fernanda Salinas Vélez (2532) o bien con la reforma que introdujo la ley 791 de 2002, para cuando se interpuso la acción reivindicatoria - 15 de junio de 2010- no

Radicación nº 25183 31 03-00 1 -2010 49678-55-836-2000-70846 1

se alcanzó el plazo de ley para que operara adquisitivo.
el fenómeno

Atañiendo a la identificación del predio en mayor extensión se apoyó en la inspección judicial practicada el 11 de febrero de 2016 y sostuvo, que «pete a que no se indicaron en la derivanda si están enunciados en el documento que de Mexico la miseria, cómo es, en el Folio de matrícula inmobiliaria, y también señalado en la demanda de rectificación, guardando total similitud», memorando las apreciaciones hechas por el perito designado en la instancia, de cara a «lo cual, al ser confrontado con lo primeramente dicho y con las otras pruebas aportadas: a la foliatura, como son, las sentencias emitidas por el Juzgado 13 civil del circuito de Bogotá y de la Juan Esteban Montoya Giraldo del María Paula Quintero Ramírez de Bogotá, la diligencia de secuestro que se tramitó en el proceso de sucesión de Felipe Santiago Ospina Muñoz Romero y Mauricio Andrés Rojas Cifuentes por comisión impartida por el Juzgado promiscuo de familia De hecho contable y sobre el cual le prosperó la oposición por la ineficacia de cautelar que formuló el apoderado de Mauricio Andrés Rojas Cifuentes cómo se advierte de la decisión de esta corporación que dirimió la apelación el 11 de agosto de 2016 (COM), lo cierto es, que no existe la diligencia aludida y por de más, los exhortos de la litio no presentaron reparos al respecto y de caTQ a la concesión en momento; en consecuencia no hubo lugar a poner en erredicho la identificación del predio en mayor extensión, por tanto, la posición del perito que echo de menos hacer referenciar bajo coordenadas, actualizadas o la coincidencia puntual de la cabida de terreno de mayor extensión en el libelo genitor, que como se señaló no se hizo, o, en el certificado de tradición y libertad que alude los entoldes tradicionales es por dichos y razones, en nada desdibujan la certidumbre que se trece sobre el terreno de mayor y la porción en la cual recae la pretensión».

Agregó que ante la naturaleza y efectos que tiene la sentencia de pertenencia dictada en beneficio de María Paula Quintero Ramírez

Radicación nº 45101-63-641-2004-71266 1 03-00 1 20 1 0 00247 01

María Paula Quintero Ramírez, y que «no han sido objeto de otro pronunciamiento que las desdibuje, lo cual, desvirtúa la posibilidad de que otra persona pueda afectar posesión sobre el mismo predio o parte, o min de hacerlo safer en el mismo tiempo que sirvió de sustento para la declaratoria de pertenencia; es decir, no puede el Tribunal emitir a hacer consideraciones sobre la averuaciones realizada: S acerca de la posesión alegada por el demandado principal desde el mes de octubre de 1963, ante unliéndose de un documento que contiene un negocio pactado con el prescribiente, como quiere que la declaratoria de pertenencia amparado bajo la figura de la coyuzgada con efectos erga omnes, repele esta clase de ataques sobre la posesión reconocida».

Coligió así que «se demostró la cadena ininterrumpida de títulos que preceden al iriucado por la parte demandada, si se tiene en cuenta que el demandado a lo sumo puede detenerse como poseedor con posterioridad a la sentencia que en este caso es el título y su inscripción en el registro, pese a que en el libelo

de demand a se hnya hecho mención a un momento anterior - nouiernbre de 1990- coino lo reconoció en el hecho num4», cuyo contenido «en nada desacredita que la decfnración de perteneucia le reconoció al canDante José Ángel el Éítufo de dorninio de ma posesión que acreditó)udicialinente con anterioridctd a era /echn, aí menos 20 años atrás, antigüedad que preualece sobre el derec■io alegado por el poseedor demnndndo».

Rematô la decisión pronunci■ndose respecto de las restituciones mutuas consecuenciales a la reivindicación, para reconocer los frutos en favor de los reivindicantes y a cargo del enjuiciado en cuarrtía de \$259.214.641-70-385-2013-29400 13, y las mejoras en beneficio de este ultimo y a cargo de aquellos por valor de \$682.342.885 73733-26-812-2017-10251, autorizando a las partes para que «de estimnrlo indicado, en su momento, pueden tracer las reepectuias

Radicación n' 25183 31-03 0 31 84300-24-190-2034-18940

compensaciones respecto de las cnttidades aquí deduci elas por frutos ;j me)oras».

yl. T.A flifiTWANfiADEfiASAOIÖN

El censor propuso cuatro (4) cargos, soportados en las causales primera, segunda y quinta, de los ciales la Sala conjuntara los cargos tercero y cuarto, que endil gan violación indirecta de normas sustanciales, en razón a c ue a más de tener fundamentos similares están llamados a temer acogida, quebrando de forma integral la decisión, 1 o que torna innecesario abordar el análisis de los restantes.

CARGOTERCERO

Con soporte en el numeral 2º del artículo 3,3 6 del María Paula Quintero Ramírez del Proceso denunció la « uioloción indirecta de la ley sustancial, derivada de error de hecho por falso)uicio de i•xistencin sobre varias pruebas, lo cual hizo que el fallador de tn.stu icin uiolara de irtanera indirecta, ello es de aianera mediato las siyu ientes normas,

artículo S8 y NO de lo COHGtittf CiÓii ductosa/, artícu los 7 69, 16S, 1 90, 192 y 1 92 del Laura Fernanda Salinas Vélez del Proceso, artícu los 762, 767, 768, 769, Z 535, 94ó 950, del Felipe Santiago Ospina Muñoz, artículo 2 de la Ley 1 561 de 01S, artículos 2 y d de la Ley 4 de J 9TC».

Sostuvo que el tribunal no valoró los sei., (6) poderes otorgados por los sectores María Paula Quintero Ramírez, Lm s Fernando, Laura Fernanda Salinas Vélez, Alfonso, María Paula Quintero Ramírez y Felipe Santiago Ospina Muñoz «donde son enfóticos en afirmar que ” . e'n mi nombre p representación, inicie p hese hasta su terminación ... ' p ' . , p en general lleve el proceso hnsta sus u ltimas consecuencias en defensa de mis

Radicación n° 69167-47-611-2005-16664 1 03-00 1 20 1 0-00247 01

legitimoz intereses ». los cuales demuestran que seis de los ocho hijos de José Ángel Romero «dernandaron fa reivindicación para ellos y no para la masa sucesoral», cuya desatención impidiô que se abrieran paso las excepciones de falta de legitimación en la causa y falta de integración del litisconsorcio necesario que esgrimió como defensa •!dev virtuándose nsí ■a aplicación del artículo 9 73 del Felipe Santiago Ospina Muñoz, aí nJrmnr el fallo impugnado que low deinaridatites

estaban facultados para deinandoT la reivindicnción p restitución del inmueble para la sucesión, cuando no están presenter dos (2) herederos determinados del cnusante, ■os senores CARBON GPIO ROMERO AVELLAMEDA, hijo matrimonial del causante y su hijo extramnrtrímoninf V■CTOR • LOO 2tOMATO RODR■CrUISZ, mōs Nos herederos indeterminndos de ía causnnte AfVA MERC2fD f AVEf EAMEDA WORTHtS, en su condición de expos a del cousonte. Cos a Hi/erente es que los deman6f aates hayan pedido la reiuindicnción p restitución del inmueble n /auor de la sucesión, pero como lo

■licieron a nombre propio, debían estar preyentes todos los cnusafiabientes de don NOTE ÁNCrE£ >. Omisión que se ve reflejada en la resolución del caso, puesto que en ella «en su literal primero declara que pertenece a low sets (6) dernandaiites e■ inmueble Laura Fernanda Salinas Vélez, ;j en el fifernl tercero ordena la restitución del inmueble a fauor de los seis (6) dertiandantes, y en el literal cuarto condena al pago de los frutos ciuifes a fauor de los mrs mom».

Aludiõ tambiën a la desatención de la providencia emitida por el Diana Carolina Pineda Mejía de Familia de Chocontà que declarõ probada la oposición hecha por Felipe Santiago Ospina Muñoz sobre la zona que posee n e} to-»s ; del oficio que ese despacho librõ, informando la existencia de la sucesión de Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, sin que los herederos de ésta hubieran demandado, siendo que ta1 « ornisión evidencia aiin mós o pone de present te que los causa habientes no son solamente los 6 demaudnntes, sino que de igual formas están los

Radicación n" 25183 3 1 03-0 1 -20 10 60881-61-565-2020-14250 1

herederos determinados e indeterminados de la causante ANA MERCEDES AVELLANEDA CORTES, quienes no demancaron, no Jeron notificados, ni mincu íados al contradictorio, evidenciandc ese documento omitidO htm nes más, la falta de legitimid ad ert íos demandantes para adelantar solos la cansa que originó el fallo recurrido er! casación».

Acusó la preterición de la confesión de los reivindicantes, sobre la posesion que ejerce Juan Esteban Montoya Giraldo desde hace mas de 35 anos de manera continua, y con esto, « uulneró de manera indirecta el artículo .í 97 del María Paula Quintero Ramírez del Proceso, que regula y apíica la confesión de ,aarte» .

De igual modo refirió la desatención de lo'» testimonios de Diana Carolina Pineda Mejía, Felipe Santiago Ospina Muñoz pez Beltrán, Mauricio Andrés Rojas Cifuentes y Felipe Santiago Ospina Muñoz, arguyendo que [L]a prueba testimonial es de trascendental importancia para demostrar la posesión, debido a fr>s ingred rentes subjetivos del nnimus y actos de dueño que ejerce el pos eedor y por esn rozón los anteriores testimonios son in/upentes de mnne ru de nitiva en la parte resolutive de la sen £encin, porque al probar el tien po de posesión sobre fu zona de terreno que tiene el demand ado, condu.e a la negatiun de las pretensiones ñe la demanda»', al igual que descartó el interrogatorio del demandado Diana Carolina Pineda Mejía.

Dijo que «otra prueba omitido por falso juicio de e xistencin, es la prueba inñiciarin, la c:nal tampoco ye menciona ni Que tenid a en cuentn por el fallador de instnncin, la cual está reconocid a en lo >- articulos Z d 0, 24 1 y 24 2 del María Paula Quintero Ramírez del Proceso», y en el legajo existen multiples indicios que conducen a la negación de las pretensiones, relatando los hechos que estim a probados,

RadicaciÔn n° 25 1 83 3 1-03-00 1 20 1 0 00 37866-61-519-2022-35862

cuya valoración conjunta « conducen a la demo:Stración del hecho indicado del silogis mo racional, corno es que PAB1 O EMILIO ZtOMERO RODRÍCrUISS, nunca entregó si perdió la posesión de la zorin de terreno en estos SS anos que lleva en posesión; que existía un títí 10 pTCViO O la iniciación del proceso reiuiidicatorio de dominio que acredita la poBeziõn del inmueble en onbeza del dernandad o, conf es el documetito firmado el 2Ó de Febrero de 198 9, y Que JOSE ÁHCrISL nunca tuvo fu uofuntnd o ef deseo de rec/abrir fa posesión sobre la zona de terreno ya mencionndn, todo ello conduce a cnn sentencia)ud icial negando las pretensiones de la demanda y saluaguardando así el derecho legítimo del demandado».

«El Tribunal de instancia consideró la sentencia de pertenencia confirmada el 2 de Mayo de 1991 por esa misma Corporación, como prueba suficiente para conceder las pretensiones de la demanda, proceso unforntiio de prueba unica que se convirtió en conocimiento subjetivo, uerdod sub)etiun que no cowesponde a la ueTdad fáctica, conclusión jurídica que se oripinn en esa realidad sub)etivn, que corresponde a un exagerado culto o reverencia a la sentencia judicial de pertenencia que no se ajusta a la realidad ob)etiua dei proceso y que por el contrario eB eí fruto del árbol envenenado, como lo es ef ocultamiento de los herederos ñeterminndos en esa demanda de pertenencia» .

Precisó que «/€Jf error de hecho ori9inndo en el falso juicio de existencin sobre todas las pruebas antes señalad as y onafizadns, conduyeron al Fálador de Ens tancia ri violar de mariera tndtrecta los articulon E8 g 6O de la María Paula Quintero Ramírez, artículos del Laura Fernanda Salinas Vélez, 2S32 que establece el tiempo para la adquisición por uía extraordinaria o eztinción del derecho de dominio, TOT que consngro la unídnción del título que en un principio /ue nulo como lo fue el documento del 2õ de Febrero de 1989, artículo TO8 que consagra el principio de la bucha fe g el artícu lo Tõ9 que consngn la presunción de buenn je, y artícu lou 164, 1O6, 167 240, 24 1 y 242 del Diana Carolina Pineda Mejía del Proceso».

Radicación ri' 71067-91-573-2012-23275 -03-00 1 -20 10-00247 01

Concluyó diciendo, que «/S)e presente uiofnción indirecta de la leg sustnncinf, por la uín del error de hecho originado em el falso juicio de existencia sobre prueba documental, confesión de parte, interrogntorio del demandado, la prueba testimoninf y la prueba iridiciaria. Omisión probatoria que permitió edificar la sentencia recorrida sobre nua prueba umcn que cons¿itupe ann yroposición jurídica/ormaf, tuas no material, como si la re ejart el cort)ti rtto probatorio ignorado u omitido. Las pruebas omitidas conducen ri la sentencin negntorín de las preterisiones de la demanda g por era ma el reconocimiento del derecho del demandado».

CARGO CUARTO

Acusó el pronunciamiento por uiofnción indirecta de la fey sustnncinl derivada de error de hecho manifiesto y trascendente por falso inicio de identidad sobre las pruebas que ce demostrnrón en desarrollo del presente cargo, error Que uioló de inaiiera indirecta la leg eustancial por falta de aplicación de los artículos 58 y 6O de la Laura Fernanda Salinas Vélez, artículos 2S32, T67, T68, 769, del Juan Esteban Montoya Giraldo, artículos 164, 1 6T, 1 7d g 1 7Ó, del Juan Esteban Montoya Giraldo del Proceso, e interpretación errónen de los artíouulos 946, 949, 950, 9TO y 762 del Código Ci mil».

Este aparte lo perfila por un falso juicio de identidad, aduciendo que la demanda «que dio origen n fu sentencia recurrida en sede de casación, es unforndn parcialmente en la sentencia recurrida, porque se omite o se quita, se cercenan las partes donde los demandantes con esan hechos releuari tes para ser tenidos en cuenta en In sentencia y por esa río negar tus pretensiones, para lo cual expone el contenido de las pretensiones y de algunos hechos que la sustentan, para decir que •{AJ pesar de todos los hechos confesados en in demanda, el fallador de instancia, únicamente toma en cuenta o se ju en los apartes que ofectan el derecho de posesión del deinand ado,

Radicación n° 13926-61-503-2020-86893 I -03-00 1 2010 00247 01

como en efecto ocurre con el hecho cuatro donde se da plena credibilidad a ía falacia que el demandado solamente entró en posesión def inmueble en Nouiemòre de 1990, cuondo eve hecho mentíroso lo dev uirtúan el revto del con)unto probòatorio».

Cuestionó el alcance que se dio at certflfCado de tradiciòn y al documento suscrito entre los señores José Ángel y María Paula Quintero Ramírez, llamado «contrnto de comproiniso», en donde este último «es anterior a la prezentación de la de stand a de pertenencin y sentencia de perfenencin, es mencionndo en la sentencio

recorrída, pero su valor probatorio, su significado, su mensaje total, es cercenado o recortado, para quitarle la condición de título adquisitivo anterior a la presentación de la demanda reivindicatoria y anterior a la sentencia de pertenencia, y así o por era uía se reconoció el derecho a los demandantes y negó el legítimo derecho al demandado al decir que la posesión se le cuenta a partir de la ejecución de la sentencia de pertenencia. Este documento anterior a la sentencia de pertenencia constituye título anterior a la adquisición del derecho real de dominio o propiedad del causante JOSÉ ANGEL ROMERO RODRÍGUEZ, lo cual no permite la prosperidad de la acción reivindicatoria de dominio».

Se pronunció sobre el testimonio de Juan Esteban Montoya Giraldo -quien fue testigo del acuerdo que se celebró entre los hermanos José Ángel y Diana Carolina Pineda Mejía- diciendo que «esta prueba también fue cercenada en su mensaje y significado, para simplemente argumentar que no tiene validez porque prima el fallo de pertenencia, afirmando que el documento ratifica la posesión en cabeza de PABLO EMILIO y que nunca entregó la posesión de esa zona de terreno, es decir ratifica el título anterior».

Radicación n° 16186-70-153-2035-55849 03 0 91-2010 96235-84-875-2003-15384 1

Imputó igualmente falso juicio de identidad respecto de la diligencia de secuestro practicada por el Juzgado

Promiscuo de Familia de Chocontá, en donde los testigos declararon que María Paula Quintero Ramírez tenía una posesión entre 40 y 38 años, la cual «es mejorada en la sentencia recurrida y valorada parcialmente dentro de la misma decisión, debido a que únicamente el fallador de irto a ucta, toma lo referente a los linderos, para argüer que existe la identidad del inmueble de la demanda con el inmueble que ocupó el demandado, pero cercenando, desconociendo la parte esencial de dicha diligencia como lo es la aceptación de la oposición, los testimonios recibidos dentro de la misma y la actitud de uno de los demandantes señor TOPICÓ S ORLANDO RODRÍGUEZ AVELLA DA, quien se negó a permitir que fueran interrogados y los documentos aportados dentro de la misma, diligencia en su totalidad que pone de presente la posesión pública, pncí cn, cor itints, es decir ruintermpid a por más de 40 años que fue corroborada coti Niche diligencia de secuestro, habiendo sido tan positiva para el demandado tal diligencia, que la decisión tomada por el juez comisionado, fue ratificada por Juan Esteban Montoya Giraldo coinitente y con firmada por la Diana Carolina Pineda Mejía- Familia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cardinmrcn».

Insistió en que igualmente se recortó el interrogatorio del opositor Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, quien explicó detalladamente como obtuvo la posesión, su conservación y aportó el documento de 26 de febrero de 1989, así como las decisiones judiciales que aceptaron su oposición al secuestro emitidas por el propio tribunal, las cuales evidencian «el legítimo derecho real de posesión que tiene el demandado sobre su porción de terreno desde hace 28 años, o 28 años de posesión para el inóvato de la sentencia de pertenencia y el 7 a Ros de posesión para el momento de ser presentada la acción reivindicatoria de dominio».

Radicación rj° 25 183 -3 1 03 -00 1 -20 10-00247 O1

Ese cercenamiento también lo pregonó de la contestación de la demanda y el escrito de mutua petición, al tomar solo lo relacionado con los linderos y calidad de poseedor «pero omitiéndose el resto del contenido que conduce a la prescripción del derecho para los demandantes».

Pregonó que «la valoración sistemática, integral, en conjunto, racional y bajo los principios de fusión y principios científicos de la psicología del testimonio y proposiciones jurídicas materiales, de una parte se concluye que tales pruebas fueron objeto de error de hecho por falso juicio de identidad al no dorse el valor y alcance probatorio correspondiente, y de otra parte muestran en ese punto cercenando o recortado el legítimo

derecho que le asiste al demandado y que por tanto tales probanzas conducen a la sentencia que debe negar las pretensiones de la demanda, porque muestran el derecho del demandado a seguir conservando su inmueble».

Culminó diciendo que, el «mismo contenido de la demanda en la parte no valorada, que no fue tenido en cuenta de manera completa por el fallador de instancia, mientras que no hay identidad entre el inmueble cuya reivindicación y restitución se pide, con el inmueble que ocupa el demandado, existiendo una diferencia de más de 2 hectáreas entre el predio que ocupa el demandado y el resto del inmueble Diana Carolina Pineda Mejía. Los linderos escritos en la demanda, tampoco corresponden a los del predio Juan Esteban Montoya Giraldo, incumpliendo así con uno de los requisitos del artículo 946 del Código Civil, cual es la plena identidad del bien a restituir; la demanda también falsea el número de herederos determinados del causante, los cuales reduce a seis (6) cuando en realidad son más, confeccionando igualmente dicha demanda a que el predio que ocupa el demandado tiene vocación agrícola, lo cual lo hace objeto de aplicación de las normas de señalamiento de las pequeñas propiedades agrícolas, donde el término de prescripción para adquisición del derecho de dominio es más corto».

Radicación nº 25183-3-03-001-2010-16542-52-744-2034-86128-1

CONSIDERACIONES

1.- Dentro de las causales que pueden servir de fundamento a este medio extraordinario de casación esta la violación indirecta de normas sustanciales, prevista en el numeral segundo del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, la cual lleva inversa la disconformidad con el trabajo valorativo que hace el juez, bien por la indebida interpretación que hace de la demanda o su contestación, ora cuando supone, omite o altera el contenido de los elementos de convicción que le sirven de soporte a su resolución, con la connotación de ser manifiesta y trascendente, de suerte que la apreciación realizada se muestre alejada de la realidad procesal, absurda, o sin justificación, pero además que influya en la forma en que se zanjó el debate, generando así la trasgresión de las disposiciones sustanciales llamadas a operar en la contienda puesta a consideración de la jurisdicción, que de no haber ocurrido el resultado sería distinto.

Acorde con esto, «no cualquier error de esa especie es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, ya sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables/es del sentenciador, de jure de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escogido de la presunción de acierto» (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 45751-94-361-2013-56522-1).

Radicación nº 25183-3-03-001-2010-52982-82-129-2027-65743-1

Criterio que descansa en el hecho de que «el juzgador de instancia, con su apreciación de los aspectos objetivos y jurídicos de los medios de prueba, tiene la clara atribución de estimarlos conforme a las reglas de la sana crítica y arribar a las conclusiones pertinentes que sustenten el correspondiente fallo. Por esta razón en principio, tales conclusiones deberán mantenerse, a menos que el sentenciador hubiese incurrido en error evidente de hecho o en error de derecho trascendente, para quebrar el fallo atando» ; y en ese orden, la presunción de legalidad y acierto con que viene precedido el proveído «no se puede evocar mediante una argumentación que se limite a esbozar un no parecer, por ponderado o errado que sea, toda vez que, en abstracto, tanto el proveído le inerece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial» (CSJ SC de 5 de feb. de 2001, Exp. nº 58-11).

La acción reivindicatoria es una manifestación del derecho de persecución que tiene el propietario de un bien que ha sido despojado de su posesión para procurar su recuperación de manos de quien ejerza ésta, siendo definida en nuestro ordenamiento como «la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla» (art. 946 C. C.), legitimando para su ejercicio «al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o condicionada de la cosa» (art. 950 C. C.),

excepcionalmente, • al que hn perdido la posesión regular de la cos a, y se liallaha en el caso de poderlQ ganar porprescripción» (art. 95 1 C. C.).

Atañedero a la esencia de esta acción dominical esta Corte ha adocrinado, que:

1 COST SC de 10 de die. de 1999, ExJo. S277, reiterada TSC de 1 9 ãe seyt. de 2006, Exp. 1999—00633 01 g SC2 768—201 9, de 23 de)ul. de 20 1 9, Rad 20 10 92831-72-836-2018-69894.

Radicación n° 251 83-3 1-03-00 1 201 0-00247 01

«dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la inequírocn y adecuada protección del derecho de propiedad, el derecho romnno prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reuiuindictorio /reuiuindtctntio, Libro VI, Título I, Dipesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -p se sigue auto ando para recfnmnr que, judicialmente, se ordene nf poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este ultimo, por mnern que la ncción reuiuindicatoria, mifennrinmente, ma supuesto no sólo el derecho de dominio en cnbeza de quien la ejerce, sino también, n manera de insosfnybnfe presupuesto, que éste sea objeto de ataque ‘en ann/orma única: poseyendo fu cosn, y así es iindispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho’

•“s *.i. . . Corno lógica, a la par que forzosa consec:uencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, emergen las demás

exigencias basillare s para el óxito de la ncción reuiuindicatoria, c:nales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuotn indicioa de la mismn, g que exista identidad Sntre la cosa materia del derecho de domirio que ostenta el actor y la poseída por el demandado» (CSJ SC de 15 de ago. de 200 1, Exp. 6219, reiterada 28 de feb. de 2011, Rad. 32853-57-259-2026-66507).

Siguiese entonces, que para la prosperidad de este resguardo se hace imperativa la concurrencia de los siguientes presupuestos: «derecho de dominio del demndndnte, posesión del demandado, identidad entre el bien perseguido por el actor y el poseído por la parte pagina, y tener por objeto una cosa singular reuiuindica ble o cuotn determinndn de una cosa singular, siendo los dos primeros los que de nen quiénes tori los legítimos contrndictores en ln controversia, esto es, el titular del dominio como nctor y el actual poseedor por el aspecto pasivo g quien, segun fu presunción consngndo en el nrtíwfo 762 ib., se reputa duetlo del bien» (CSJ SC de 17 de ago. de 2000, Exp. No. 6334; 27 de mar. de 2006, Exp. No.

O 139—02, 13 de dic. de 2006, Exp. No. 00558 01 y 4 de ago. de 20 10 Exp. 2006—00212—O 1).

Radicación n° 59927-59-560-2019-66154 03-00 1 20 1 0-17320-43-343-2032-56097 1

- Segtín se reseñó en precedencia, los señores Laura Fernanda Salinas Vélez, Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, Felipe Santiago Ospina Muñoz, Alfonso, Laura Fernanda Salinas Vélez y Juan Esteban Montoya Giraldo, demandaron la reivindicación del predio Mauricio Andrés Rojas Cifuentes con matrícula inmobiliaria 50N-282650 y un área aproximada de 5 Ha con 3635,64 mts2, perteneciente a María Paula Quintero Ramírez, cuya posesión detenta Felipe Santiago Ospina Muñoz, para que se le ordene restituirlo, junto con los frutos que pudiera haber producido con mediana diligencia, teniendo en cuenta que tiene vocación agraria.

El demandado se opuso a la reclamación, alegando su condición de poseedor por tiempo superior a 30 años, por haberlo recibido de su madre Mauricio Andrés Rojas Cifuentes de Romero, luego del fallecimiento de su padre Laura Fernanda Salinas Vélez, ejerciendo posesión desde octubre de 1963 de manera ininterrumpida, sin reconocer dominio ajeno, amen que si bien no se opuso a1 reclamo de prescripción adquisitiva que elevó su hermano Jose Ángel Juan Esteban Montoya Giraldo, fue en razón at acuerdo previo celebrado entre estos, delante de testigos, en el que este ultimo «no solamente reconocía a so hermano PABLO

FM■LIO ROMERO RODR■GUEZ, como poseedor del predio que tiene en posesión, sino que tambiéni we obfigó a trasferir el derecío real de dominio o propiedad!! a su favor !«lo cual nance cumplió» jn. 45 Cs 1).

El recurrente reprochó al tribunal una valoración Inapropiada de las probanzas que sirvieron de apoyo a la determinación acusada, cuando dio por sentada la acreditación de la legitimación de los peticionarios quienes, si bien son herederos del propietario inscrito Diana Carolina Pineda Mejía

Radicación n° 74127-82-339-2015-51854 O 91-2010 00247-O 1

Laura Fernanda Salinas Vélez no son los únicos con una vocación sucesoral y que no demandaron, lo que impedía asegurar que estaba representado el 100% del derecho de propiedad como exige el artículo 946 del Código Civil, de igual modo, el alcance absoluto que se confirió a la sentencia de pertenencia emitida en el juicio que aquel promovió, previo acuerdo con este, contenido en documento allegado en el cual consta que se reconocía su posesión en una porción de fundo y se obligaba a transferirle el dominio de dicha parte y el desconocimiento de todas las pruebas que demuestran su posesión y la calidad del predio ante se vocación agraria que favorecerían el reconocimiento de la prescripción que justificaban la aplicación de las normas que le permitan hacerse al dominio mediante dicho modo en corto plazo.

4. - Siguiendo tal derrotero, se debe examinar de manera liminar hasta dónde llega el derecho de los herederos para demandar la reivindicación de un predio de su causante en poder de un tercero, y si en este particular caso se atendieron las exigencias que legal y jurisprudencialmente se imponen que permitan dilucidar la concurrencia de la legitimación en la causa de los actores, que fue hallada satisfecha por el colegiado, pero que es elemento fundamental de la acusación planteada por el casacionista, a efecto de determinar la ocurrencia o no de los errores endilgados; cuya ausencia, por demás, habilita a los jueces para que sin necesidad de mayores disquisiciones denieguen las pretensiones de la demanda, pues al decir de esta Colegiatura.

Radicación n° 25 183 -3 1 03 -00 1-20 10 00247 01

«la legitimación en causa, esto es, el interés directo, legítimo y actual del “titular de una determinada relación o estado jurídicos” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Laura Fernanda Salinas Vélez, 1983, pp. 660), es cuestión propia del deTeclío sustancial, atañe a la pretensión y es un presupuesto o condición para su prosperidad.

Por tal motivo, el juzgador debe tener en cuenta la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sus actos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretenda y /rente a quien se reclama el derecho sea o no su titular. ...» CSJ SGC de 1º de jul. de 2008, Rad. 37855-31-177-2030-81998 1-0 1, reiterada SC2768-20 19 de 25 de jul. de 2019, rad. 2010—00205—03).

- En desarrollo de esa labor se encuentra que en las acciones reivindicatorias esa legitimación en causa la tiene, en línea de principio, quien ostente la condición de propietario y «sobre este gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (artículos 42 y 54 del D. 11 NO de 1970; cas. cix. sentencias de 30 de mayo de 2001, exp. S6YC y 6 de octubre de 2008, exp. Y89S) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo dominio inóculo y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado» (CSJ SC11786-20 16 de 26 de agosto, Exp. 2006-00322-0 1).

Ahora bien, con la muerte de una persona su patrimonio se transmite a sus herederos, quienes desde el momento de la delación de la herencia suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, surgiendo así el derecho de herencia y de ahí la indivisión de la masa herencial que permanece en ese estado hasta la aprobación de la partición y adjudicación, bien sea ajustado a lo definido

Radicación n° 25183 31-03-0 01 61148-90-533-2013-57482 O1

en el testamento, o conforme las directrices de la sucesión intestada, radicando así en los sucesores el dominio sobre las cosas heredadas, dado el reconocimiento que tiene la sucesión mortis causa como modo de adquirir el dominio.

Uno de los efectos que se generan ante la conformación de dicha universalidad patrimonial, es que durante la indivisión podrán los herederos promover las acciones que hubiera podido adelantar el de cujus para la protección de su peculio, entre las cuales está la de emprender o enfrentar «mas mismas acciones posesorias que tendría y a que esaría su eto se autor, si viviiese» (art. 975 C. C.), más puntualmente se les autoriza para promover la «reivindicatoria sobre cosas hereditarias reindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos» (art. 1325 C. C.).

No puede olvidarse, que el derecho a reivindicar que le confiere al heredero el artículo 1325 del Código Civil se puede ejercer por estos a nombre propio o para la herencia, dependiendo si se ha efectuado o no la partición de la masa herencial, toda vez que en el primer evento este asume la posición de su causante, mientras que en el segundo reclama un derecho propio, habida cuenta que con ocasión de ésta se radica en él el dominio de los bienes que le hubieran correspondido y que estén en manos de tercero ».

Radicación n° 78357-78-202-2024-50808 1 03-00 1 20 1 0 66884-88-917-2016-55773 1

como demandantes a reclamar la cosa común, o bien podrá cualquiera de ellos accionar individualmente, en cuyo caso la reclamación se hará para la comunidad Gerencial, como bien lo ratificó esta Corte en sentencia SC de 5 de agosto 2002, rad. 6093 al decir, que «(. . .) el heredero no puede reivindicar directamente pura y simple un bien cuando la sucesión no ha sido liquidada, o cuando lo ha sido, pero en la partición no le fue adjudicando el bien que reivindicó, por carecer, en ese momento y respecto de la cosa, de dominio singular, en la medida que ella sigue siendo propiedad de la herencia o de un heredero distinto, así este sea putativo.

Ha dicho la Corte que “El simple derecho a una herencia no confiere acción para reivindicar como si fueran exclusivas y definitivamente propias del heredero, las cosas que constituyen la herencia (artículos 940 a 949 y 1325 del Código Civil)” (G. U., 8 de octubre de 1997, t. DII, C1}, y también que, aun siendo único, el heredero “no puede ejercitar para sí, sino para la sucesión las acciones (reales o personales) que correspondían al causante” (Cas., Z 3 de febrero de 1991 G.U. XXII, 284; 6 de noviembre de 1993, G. U. , Z 46, 8 de julio de 1930, G.U. XXXVIII, 48, C 7 de noviembre de 1935, G.U. XLIII, 38 9; 6 de noviembre de 1959, G.U. XLVIII, 8 98; 8 de marzo de 1964, G.U. LMI, 84) ».

En tiempo más reciente reafirmó que:

« Si lo que se pretende es perseguir los bienes que pertenecían al de cujus, pero se encuentran en poder de terceros en calidad de poseedores, existen tres caminos a seguir que se desprenden del referido artículo 1323 del Código Civil: Diana Carolina Pineda Mejía.

«El primero corresponde a la reivindicación para la comunidad hereditaria antes de que se lleve a cabo la partición, sin que pueda el actor pedir para así porque su interés se limita a una mera expectativa, caso en el cual la titularidad se conserva a nombre del difunto.

En el segundo, Ctf fmiHadn la porttci3n el nsipnntario queda facultado paTa reuindicar en nombre propio lo que le correspondi3 en la distribuci3n y no sea posible recibir en forma efectiva por

Radicaci3n n° 73868-96-132-2013-97388 1 03 25305-11-277-2025-26308 10 12705-86-748-2023-69771 1

ocuparlos otra persona, haciendo valer el efecto de la adjudicaci3n que se le hizo.

En el tercer escenario, como consecuencia de la petici3n de herencia, el nccionnte busca que los bienes que ert on comienzo heron ad judicados a los herederos putntiuos o nf menos de igual derecho, de los cuales diepumicron coo poslerioridad a la repartici3n, retornen al caudal para que sean redistribuidos, caso en el cuai lo que debe demostrarse es que el domi Rio lo detentaba el failecido al inomento del deceso y la certidumbre de la calidad que inuoca el demandante. SC 1693 de 2019, de 14 de mayo 96130-60-731-2004-51440 1).

Quiere decir ello, que no habr■ legitimaci3n en la causa por activa por parte del heredero que pretenda reivindicar para si el dominio 'pleno y absoluto' de bienes relictos, mientras la comunidad herencial permanezca indivisa, a ser esta la verdadera titular del derecho, y para quien debera demandarse, so pena que su reclamaci3n deven ya infertil.

7. - Err el en b judge el cuestionamiento give se hace al tribunal fue haber reconocido esa legitimaci3n en causa para procurar la reivindicaci3n del bien denominadci Mauricio Andr3s Rojas Cifuentes de propiedad de Jose Angel Felipe Santiago Ospina Muoz a Mauricio Andr3s Rojas Cifuentes, Mauricio Andr3s Rojas Cifuentes, Diana Carolina Pineda Mejia, Alfonso, Tomas C rlando y Laura Fernanda Salinas V3lez, dado que estos, pese a alegar la condi3n de herederos pidieron para si y no para la sucesi3n, siendo que la demanda no se propuso por la totalidad de los legitimarios del finado.

Del material demostrativo que se dice ir debidamente apreciado u omitido est3n los poderes conferidos por los seores Diana Carolina Pineda Mejia, Mauricio Andr3s Rojas Cifuentes, Maria Paula Quintero Ram3rez, Alfonso, Maria Paula Quintero Ram3rez, Diana Carolina Pineda Mejia,

Radicaci3n n° 25 33228-77-676-2001-63589 -03 -00 1 -20 10-002 47-0 I

para iniciar el pleito de marras, aduciendo su «condici3n de heredero fa] del cassette UOIS3 ANGEL ROMERO RODRIGUEZ, fallecido ef 72 de febrero de 2009, en la CiL■dad de Bogot3 D.C. por ser h o fa] fegitimo [aJ del mismo, coriforme lo dropone el art3culo 60 del C3digo de PTocedimiento Ciuil!! diciendo conferir «poder especial, amplio p su ciente / . . . », a n de que en mi nombre y representaci3n inicie ¥ Here hasta su terminnct3n proceso ordinario reuindicatorio de mayor cuant3n en contra del fseor Diana Carolina Pineda Mejia, mayor de edad, uecino y reeidente en GUA!SCA CUNDINAMARCA, respecto del bien inmueble, Juan Esteban Montoya Giraldo, u bicado en la uereda Juan Esteban Montoya Giraldo del inunicipio de Gunsco, Cuudinmarca, distinguido con el Folio de rnatricula inobifinrin NON-127981 [. . J y en general lleue el proceso hasta sus uftimas cotisecuecins en de■ensn de mrs fegitimos intereses» (subraya ajena at texto) jr.. 1 6 C I).

Err el libelo inaugural el mandatario designado arguy3 actuar en nombre «de los herederos determinados del causante seor UOIS3 ANGEL ROMERO RODRIGUEZ senores. . . • (sus poderdantes) pidiendo (i. J se declare que el occiso Jos3 Felipe Santiago Ospina Muoz es propietario del inmueble en contienda, en virtud de la declaraci3n de prescripci3n adquisitiva que en su favor hiciera el Laura Fernanda Salinas V3lez del Circuito de Bogot3 D. C. (ii. j que desde el 22 de octubre de 1990 a la fecha de presentaci3n de la demanda no ha corrido el tiempo para que Juan Esteban Montoya Giraldo adquiera el bien por prescripci3n (iii.) con fundamento en la facultad que les otorga el art3culo 1325 del C3digo Civil se condene al citado «a restituir a

(anor de los herederos, determinados del causante UO!SÉ ANEEL ROMERO RODRIGUEZ. Señores, ALFONSO ROMERO AVELLANEDA, JULIO ANTONIO ROMERO AVELLANEDA, TOMÁS ORLANDO ROMERO AVELLANEDA, ANA MARIA ROMERO AVELLANEDA, JAIRO ENRIQUE ROMERO AVELLANEDA Y LUIS FERNANDO ROMERO AVELLANEDA,

Radicación n° 25183 3 1 03 16711-33-628-2027-62873 10-68800-91-571-2011-16772 1

aquí demandarites, el bien inmueble denominado María Paula Quintero Ramírez tiro» (iv.) se le imponga al interpelado »Nagar a nguí demand a Item» (sic) los frutos naturales y civiles que pudo producir el bien (v.) y el enteramiento del procurador agrario.

El sustrato fáctico que sirvió de báculo a dichas reclamaciones refirió al fallo de pertenencia que declaró el dominio de Jose Ángel Romero, la ausencia de oposición en aquella causa, la cesión que de la posesión hiciera Pablo Laura Fernanda Salinas Vélez en favor de Felipe Santiago Ospina Muñoz, la permanencia del cedente en el predio pese a dicha cesión, la explotación económica que hace del fundo, indicando su vocación agraria, así como el fallecimiento del dueño, de la promoción que hicieron Alfonso, Diana Carolina Pineda Mejía, Felipe Santiago Ospina Muñoz, Diana Carolina Pineda Mejía, Juan Esteban Montoya Giraldo y Felipe Santiago Ospina Muñoz del juicio de sucesión, en cuyo desarrollo solicitaron el embargo y secuestro del predio Laura Fernanda Salinas Vélez, la oposición que planteó el convocado con soporte en el documento que había suscrito junto con el difunto, cuestionando la eficacia jurídica de dicho instrumento, pregonando que « los herederos del causante UO!SÉ ÁNGEL ROMERO RODRIGUEZ y aquí demandatitez f. . .], tienen total legitimidad para iniciar la presente acción» y el llamado al pleito para resistirlo, recabando que «el demandado PABLO EMILIO ROMERO RODRIGUEZ, igualmente tiene la obligación de pagar los frutos naturales y civiles que ha producido el bien inmueble materia de litis (así como el demandado (sic) . . . a partir del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y hasta la fecha en que se haga real y efectiva la entrega material del inmueble a (anor de mis representados» Ans. 20-27- Cd I)

Radicación n° 25 183 3 1-03-00 1 -20 10 00 247 01

El primero (1º) de julio de 2010, el Diana Carolina Pineda Mejía del Circuito de Choconta admitió la demanda promovida por los señores ALFONSO ROMERO AVELLANEDA, JULIO ANTONIO ROMERO AVELLANEDA, TOMÁS ORLANDO ROMERO AVELLANEDA, ANA MARÍA ROMERO AVELLANEDA, JAIRO ENRIQUE ROMERO AVELLANEDA y LUIS FERNANDO ROMERO AVELLANEDA puntualizando, que «actúan como herederos determinados de UO!SÉ ANGEL ROMERO RODRIGUEZ» (n. 29 Cd. 1) •

En sus interrogatorios los accionantes fueron contestes al señalar, que Diana Carolina Pineda Mejía tuvo más de seis (6) hijos, así:

Mauricio Andrés Rojas Cifuentes. Señaló, «mi padre tuvo ocho hijos», siendo uno de ellos Diana Carolina Pineda Mejía (n.

Mauricio Andrés Rojas Cifuentes. Apuntó, «que yo conozca somos ocho», al preguntarle si conocía a Víctor julio Juan Esteban Montoya Giraldo contestó «sí lo conozco, pues que me acuerde la verdad no pero mi papá JOSÉ ANGEL nos dio que era hijo de él con otra señora de nombre CARMEN RODRIGUEZ me parece» n. i zo ce i .

Felipe Santiago Ospina Muñoz. Dijo, «ocho hijos» de Mauricio Andrés Rojas Cifuentes anotó «si lo conozco porque era el hijo de mi papá, reconocido por el, yo lo distinto desde que era niño, cuando tenía unos 5 o 6 años» y sobre el motivo de su no participación en este proceso declaró «no sé porque» (tr. is. Ud 1).

Radicación n° 25 183 3 1-03-001 20 1 0-00247 01

María Paula Quintero Ramírez. Afirmó «yo me casé dentro del matrimonio con mi mamá ANA MERCEDES AVELLANEDA y uno de los hijos que ella falleció con CARMEN RODRIGUEZ creo que es el apellido de ella de nombre VÍCTOR» «lo conozco desde que era niño y porque es hijo de mi papá JOSÉ ÁNGEL ROMERO RODRIGUEZ y ahí aparece reconocido con el apellido de él», explicó que no tenía conocimiento del por qué este no acudió al juicio reivindicatorio (tr. is. c. i.).

A folios 8, 10, 11, 12, 13 y 14 del cuaderno uno (1) obran los registros civiles de nacimiento de María Paula Quintero Ramírez, María Paula Quintero Ramírez, Laura Fernanda Salinas Vélez, Alfonso, Felipe Santiago Ospina Muñoz y Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, que acreditan su calidad de hijos de Juan Esteban Montoya Giraldo, en tanto que a folios 29 y 30 del cuaderno cuatro (4) aparecen los correspondientes a María Paula Quintero Ramírez y Diana Carolina Pineda Mejía, que igualmente prueban su filiación con el titular de Juan Esteban Montoya Giraldo.

El deceso de Laura Fernanda Salinas Vélez fue también probado con su registro de defunción (tr. is. c. i.).

A tono con lo visto, se advierte que los señores Alfonso, Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, Tomás Orlando, María Paula Quintero Ramírez, Laura Fernanda Salinas Vélez y María Paula Quintero Ramírez entablaron la acción dominical para recuperar el predio adquirido por su causante Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, mediante prescripción adquisitiva (pretensión 1); se declare que su poseedor Diana Carolina Pineda Mejía, no tenía el tiempo para usucapir (pretensión 2); se le impusiera a este la restitución en su

Radicación n° 40331-58-503-2014-66092 1 03-00 1-20 10 00247 01

favor, esto es, a «dos aquí demandarites» (pretensión 3); junto con la condena -igualmente en su beneficio- de los frutos que hubiera podido producir la heredad (pretensión 4). Sin que al pleito comparecieran por activa a reclamar dicha reivindicación los señores Diana Carolina Pineda Mejía ni Juan Esteban Montoya Giraldo también sucesores de aquel.

8.- Consecuente con esto, del ejercicio de valoración de las mencionadas probanzas realizado por el tribunal, trasluce el error imputado por el recurrente con lo cual se transgredió el artículo 946 del Código Civil, pues si bien los actores adujeron la condición de herederos de José Ángel Romero, su pedido de reivindicación no se hizo para la sucesión sino para sí, circunstancia que les forzaba a allegar al plenario la prueba del dominio en cabeza suya, como consecuencia de la adjudicación hecha en el juicio sucesorio para cumplir con la exigencia dispuesta en el citado artículo, lo que no se dio, ya que toda la referencia que de aquel pleito liquidatorio se hizo fue lo concerniente a la oposición que formuló Pablo Emilio Juan Esteban Montoya Giraldo en la diligencia de secuestro y que fuera aceptada por los juzgadores de su conocimiento, amen que en el certificado de tradición del inmueble todavía aparece registrado como titular el finado María Paula Quintero Ramírez.

Desconociendo lo anterior, el tribunal no pudo sino bien expuso con claridad que la acción reivindicatoria «se opone a la protección del derecho real de dominio, cuando se titular se ve despojado sin su intervención de la posesión material del bien, sin embargo, esta acción también puede ser adelantada por los herederos»,

Radicación n° 21931-63-688-2014-30190 1 03 0 1-20 10 98254-43-149-2028-90307 1

al analizar el caso particular, de cara a los presupuestos para su prosperidad realizó las siguientes apreciaciones:

Que la propiedad se acreditó en cabeza de Juan Esteban Montoya Giraldo Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, porque en el certificado de libertad aparece inscrito el pronunciamiento de pertenencia que lo favoreció, lo cual es inobjetable; que acreditado el fallecimiento del titular del derecho real, se torna plausible la acción reivindicatoria a favor de la masa sucesoral, como quiera que la calidad alegada QOC IOF condicionantes es la de herederos preuistn por el artículo 75 del C. C., tal como se solicitó en la pretensión tercera de la demanda i iicinf, dado que no se ha acreditado una situación posterior que cambie esa realidad, por tanto, no era menester la integración de un fideicomiso necesario, toda vez que la demanda podría ser interpuesta por uno solo de ellos a favor de la intestada» (subraya ajena al texto) .

Con esto último el tribunal incurrió en el error que se le endilga, como quiera que, aun cuando es irrefutable que muerto el titular deviene «plausible la acción reivindicatoria a favor de la masa sucesoral», desatendió la evidencia palmaria existente en el proceso y que soporta la acusación, pues dio por sentado sin estarlo que por el hecho del fallecimiento de Juan Esteban Montoya Giraldo y ostentar los pretendientes la calidad de herederos de aquel, estos por sí demandaban para la «masa sucesoral» y no para sí, como claramente se pidió en la demanda y lo evidenciaron las restantes entre ellas su propio dicho, arrien que en sus ninguna mención hicieron del eventual derecho les asiste a Laura Fernanda Salinas Vélez y Laura Fernanda Salinas Vélez, hijos del causante.

Radicación nº 251 83 3 1 03-00 1 -20 10-68809-60-818-2003-69977 1

Ciertamente, en el curso del juicio quedó latente la indivisión de la masa herencial de Felipe Santiago Ospina Muñoz; se probó que aparte de los actores este tuvo otros dos (2) hijos, quienes no concurrieron a demandar la reivindicación, sin que siquiera fuera mencionada su condición en el escrito inicial, de suerte que se pudiera interpretar que se reivindicaba también en su beneficio como integrantes de esa comunidad y que los actores prevalidos de la facultad conferida en el artículo 1325 del Código Civil pidieron la restitución a su favor como herederos determinados del de cujus.

9.- Por consiguiente, no era admisible entender como lo hizo el tribunal que el presupuesto impuesto en el precepto 946 del Código Civil, referente a la propiedad del demandante, estaba satisfecho por la invocación hecha por los suplicantes de ser herederos de Juan Esteban Montoya Giraldo, ya que ante la persistencia del estado de indivisión de la Herencia los reclamantes son solo titulares de derechos herenciales, lo que aparejaba que debían demandar para la sucesión y no para sí, máxime que la ejercieron con prescindencia total de los restantes sucesores.

Correlativamente, a partir de ese dislate el tribunal infirió la legitimación en la causa por activa de los actores, sin parar cuenta en que se había demostrado -acorde a la ley- la existencia de otros dos (2) legitimarios, que igualmente eran titulares de la universalidad patrimonial que conformaba la masa sucesoral de Mauricio Andrés Rojas Cifuentes y que, contrario senso, no se probó que a los aquí

Radicación nº 25183 31-03-00 1 -15824-31-614-2007-61397 01

reclamantes se les hubiera adjudicado el predio en disputa que les permitiera reivindicar para sí, al haber alcanzado por el modo de la sucesión el dominio de este, para satisfacer así el presupuesto contemplado en el precepto 946 del Código Civil.

Equivocación que resultó trascendente en el sentido del fallo, pues a partir de lo anterior resolvió • declarar que pertenece a los herederos del causante Laura Fernanda Salinas Vélez, señores Felipe Santiago Ospina Muñoz, Diana Carolina Pineda Mejía, hijo Antonio, Alfonso, Laura Fernanda Salinas Vélez, han Diana Carolina Pineda Mejía el dominio pleno del inmueble denominado “El Retiro”», Cuando el predio realmente pertenece a la sucesión de Diana Carolina Pineda Mejía, la cual estaría representada en este caso por sus herederos; calidad que a más de los solicitantes, también detectan Diana Carolina Pineda Mejía y Juan Esteban Montoya Giraldo y, por tanto, con igual derecho sobre el bien.

Valga reiterar que, muy a pesar de que el ordenamiento autoriza a los herederos a demandar la reivindicación de las cosas pertenecientes a su causante que hubieran pasado a manos de terceros, mientras estos no las hayan prescrito, esa acción -en tanto la masa herencial permanezca en indivisión- se deberá promover siempre en nombre y para la sucesión; habilitándose tal reclamo para el heredero -individualmente considerado- unicamente para cuando se extingue la universalidad, en virtud de la adjudicación que de los bienes relictos se paga en el trabajo de partición, pues solo con esto se consolida en favor de estos la propiedad que impone el artículo 946 del Código Civil, para reivindicar, sin desconocer

Radicación n° 23 I 83-3 ã -03 00 1 -20 10-15435-54-864-2009-37666 I

las particulares circunstancias que pueden darse en las acciones de petición de herencia en donde se acumule igualmente la reivindicación.

10.- Por otra parte, no puede la Sala pasar por alto que de vieja data se ha señalado que con el objetivo de no hacer inagotable el derecho de acceso a la administración de justicia el libelo inicial deberá tener la claridad suficiente para que el demandado pueda ejercer a plenitud el derecho de contradicción y defensa, quien en los eventos en que no se cumplan a cabalidad con las exigencias que procesalmente se imponen, podrá esgrimir la correspondiente excepción previa, a fin de que se subsanen las falencias de que adolezca. Incluso, el propio funcionario podrá inadmitirla, a efectos de que sea corregida, o en ultimas, fijar su contenido mediante su adecuada interpretación al momento de proferir la resolución que dirima el pleito.

«Acerca de esto por último, tiene dicho la Corte que “cuando el lenguaje de la demanda, más ser indecifrabable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), para “no sacrificar el derecho material en aras de un ritualismo procesal” (CCXXXIV, 2d4), “el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la evolución real de los conflictos”, realizando “un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos”, “mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral” (cas. cix. sentencia de 27 de agosto de 2008, [XC-084-2008], expediente 11001-2103 022 199T-14171-01, énfasis de la fala), “siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en su parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”, buscando “que effn aparezca claramente en el libelo, ya de un modo directo o indirecto, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda” (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460, CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2º parte, 185)». (CSJ SC de 6 de mayo. de 2009, Exp. 2002—00083).

Radicación n° 251 83 -3 1 -03 00 1 20 I 0-00247 0 1

Empero, en el sub Site no se avizora esa ausencia de claridad del escrito introductorio, pues en este aflora diamantina la pretensión de los señores María Paula Quintero Ramírez, María Paula Quintero Ramírez, Juan Esteban Montoya Giraldo, Alfonso, Laura Fernanda Salinas Vélez y Laura Fernanda Salinas Vélez de que, aprovechando su condición de hijos del propietario fallecido, pidieron se les entregara a ellos la finca Laura Fernanda Salinas Vélez, y se les reconozca y pague los frutos que pudo percibir durante el tiempo que lo ha poseído el demandado, por lo que refulge la equivocación del tribunal, en cuanto acogió sus pedimentos, siendo que contrariando las previsiones de los artículos 946 y 1325 del Código Civil -a1 no ser titulares del dominio del inmueble a reivindicar, sino de derechos herenciales- su accionar quedaba restringido a hacerlo en beneficio de la herencia lo que no hicieron puesto que su reclamación la hicieron para sí.

Interés particular que emerge, de forma palmaria, no solo de las especificaciones contenidas en el mandato conferido, referidas líneas atrás, sino desde el soporte fáctico del libelo inicial, en donde no dijeron que el predio perteneciera a la masa relictiva, escasamente dieron cuenta de haber promovido el juicio de sucesión, incluso, frente a la legitimación -amparados en el precepto 1325 del Código Civil- se la atribuyen exclusivamente a ellos, sin siquiera aludir a los restantes herederos del causante, pero sobre todo a

mentar la carga reparatoria por concepto de frutos señalaron que tal obligación esta a cargo del demandado Diana Carolina Pineda Mejía «a favor de los demandados»

Radicación n° 25 79175-66-477-2020-10836 1 03-00 1-20 10 00247 01

{sic}2 hasta la fecha de la entrega del inmueble «a favor de mis representados» y así se insta en el petitum, que «se condene al señor PABLO EMILIO ROMERO RODRIGUEZ a pagar a aquí demandantes» .

11.- Consecuente con esto, ante lo evidente, protuberante y trascendente del error cometido por el tribunal se abren paso los cargos estudiados, lo que autoriza el quiebre total del proveído fustigado, sin que resulte indispensable para la Sala examinar los restantes reparos contenidos en ellos, pues la carencia de legitimación de los promotores torna inocuo estudiar lo concerniente a los otros tópicos que soportan la súplica extraordinaria.

12.- No habra condena en costas de la impugnación extraordinaria por su prosperidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 365 del Mauricio Andrés Rojas Cifuentes del Proceso.

Puesta la Corte en sede de instancia, debe proferir el fallo de remplazo, como se hara a continuación.

SENTENCIA SUSTITUTIVA

1.- De manera inicial es del caso advertir la concurrencia de los denominados presupuestos procesales y

Radicación n° 25183-31 1 20 10 -002 47 0 1

la ausencia de vicios que puedan invalidar lo actuado, circunstancias que permiten una decisión de fondo.

- Resulta pertinente que esta Corte se detenga un poco en lo atinente a la ausencia de motivos de invalidez, ya que durante todo el desarrollo del juicio el demandado ha venido insistiendo en su existencia por la indebida integración de litisconsorcio necesario, a no haber demandado la reivindicación la totalidad de los aeroderos de María Paula Quintero Ramírez y de su esposa An.t Avellaneda, lo cual carece de asidero como se expone a continuación.

Sabido es que habrá litisconsorcio necesario cuando se esté en presencia de algunas « relaciones jurídicas sustanciales sobre las cuales no es posible pronunciarse por partes, /mencionándose o calificándolas solo respecto de algunos de sus sujetos, porque indispensablemente la decisión comprende y obliga a todos. En estos casos la presencia en el proceso de los sujetos vincula ludo. • a esa relación se hace indispensable, en fin de que la relación jurídica y procesal quede completa y sea posible decidir en la sentencia sobre el fondo de ella» .

Cuando esto ocurre, el legislador ha impuesto la obligación a los jueces de adoptar las medidas procesales necesarias para su debida integración, desde el auto admisorio de la demanda hasta antes de desatarse la primera instancia; preclusión ésta que en combinación con la imposibilidad de resolver de mérito a que alude el precepto, dio lugar a que, en segunda instancia ante la falta de

3 Denis Echandi Ilernatido, Tratado de Juan Esteban Montoya Giraldo y Laura Fernanda Salinas Vélez II Diana Carolina Pineda Mejía 1962, pág. 18.

Radicación n° 25183 31-03 47199-16-656-2025-26550 10-00247 01

conformación del litisconsorcio necesario, se dictaran fallos inhibitorios. Postura que ha desestirnado esta Corte, por lo que en tales circunstancias ha establecido que:

un entendimiento lógico e integrado con todo el ordenamiento procesal ctuif permite afirmar, primero, que es cierto que todas las medidas de integración del litisconsorcio necesario deben se rtirse en el trámite de la primera instnncin,' y segundo, que, en cambio, no es cierto que nm vez superada tal instancia el oetitenciador superior, de continuar la de/ciente conformación de aquól, no le queda otro camino que abstenerse de proveer sobre el fondo def nsunto puesto a su consideración. Eii efecto, lo unico que en esta hipótesis impide el precepto es "resolver de merito", lo que indudablemente deyo espacio para que el juzgador ad quem pueda adoptar cuolquier inedit a procesal, legalmente ad visible, que conduzca a solucionar la anómala situación, mientras no resuelva de fondo que es lo unico que en verdad se le prohíbe; mucho más, :Si precisamente, com.o se diyo, es deber ineludible del)uez evitar los fal los inhibitorios.

Ahora bien, la ned ida procesal que le corresponde adoptar al fallador de sequndci irtstnncin estó dada por la consngrnción de la cnusnf 9ª del artículo 140 del C. de P. C., la c:nal se produce, entre otros eventos, c:uando se de je de noti car o emplazar a una de "las demás personas que debon ser citada y como parte", situación que atai'ie con los fitisconsortes necesarios, qutenes deben ser citados; Ol pTOceso)u ytamente para que se pueda resolver de mérito sobre la cuestión litigios a; situación que se da tonto frente aquellos fitisconsortes que mencionados en la demanda ;j en el auto admisorio de la misma no heron noti cndos De ós te; como frente n quienes deben ser citados, g no lo hum sido, a pesar de que por la le y o por la rinmrnJesn del litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 83 del C. de P.C." ICSJ SC de6 deoct. de 1999, Exp. 5224)

Quiere decir esto, que la indebida integración del contradictorio afecta la validez de la actuación, al incurrirse en el supuesto previsto en el numeral 8 del artículo 133 del Diana Carolina Pineda Mejía del Proceso. Empero, solo podrán invocar tal afectación los sujetos que por imperativo legal debieron ser

Radicacion n° 23183 31 -03-0 1 201 0 60621-34-161-2031-86010 1

citados como parte a la actuación, en razón que con la omision solo a estos se les truncõ su derecho de contradicción y defensa.

Ocorre, sin embargo, que por la naturaleza i del proceso reivindicatorio no es predicable la existencia de un litis consorcio necesario cuando la cosa a reivindicrrr pertenezca

en comun a varias personas, cuya falta de imponga la anulación de lo actuado.

Esto por cuanto, la acción reivindicatoria integracion

es la que tiene

el dueño de una cosa singular, de que no esté en posesiõrt, para que el poseedor de ella sea condenado n revituir-la» (art. 946 C. C.), lo que hace imperativo, a efecto de integrar caaalmente el contradictorio, que quien a ella acuda dirija la demanda contra todos los que ejerzan la posesión; concurrencia forzosa que no es predicable por activa cuando a propiedad la detenten varios sujetos, toda vez que ante ta1 supuesto no es imperativo que demanden todos y cada uno de los condueños o sus herederos, puesto que cuarn to la cosa a reivindicar pertenece a varios en comunidac. y ésta se encuentra en poder de un tercero, cualquiera de los comuneros podrá accionar para su recuperación en beneficio de la comunidad.

Con esa misma teleología cuando el bien .x reivindicar forma parte de alguna universalidad de bienes como es la

sucesión, el legislador ha dispuesto que el heredero «podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias relictivas que han pasado a terceros y no hayan sido prescritas

Radicación n° 88164-75-817-2027-36971 1 03-00 1 20 10-57143-18-856-2004-97125 1

por ellos» (art. 1325 C. C.), sea que lo haga para la sucesión cuando se ejerce antes de la partición y adjudicación, como titulares de derechos hereditarios, o para sí, en los casos que estas se hubieran concretado.

Es claro que, ante el primer supuesto, esto es, en los casos que se ejerce antes de la partición y adjudicación, dada la comunidad universal que se conforma entre los herederos la acción puede ejercerla cualquiera de estos, pero no para sí sino en favor de la sucesión. Al respecto ha sido insistente esta Corte al señalar, que

“Los que forman esta comunidad tienen sobre los bienes relictos un derecho real de herencia, no un derecho real de dominio, pues, como es obvio no adquiere tal carácter sino con la partición y registro de la misma, cuando hay bienes raíces en el patrimonio hereditario.

A forá bien, en el evento de que un tercero este en posesión de un bien mueble o inmueble perteneciente a la sucesión íntegra

¿quién tiene la personería para iniciar y seguir la acción reivindicatoria correspondiente? Como la comunidad universal conocida generalmente con la denominación sucesión no es una persona jurídica que tenga un representante, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido siempre que por activa o como demandante en acción reivindicatoria de un bien para la sucesión puede comparecer cualquier heredero, y por pasiva o como parte demandada, a fin de que la acción produzca efectos respecto de todos los comuneros, deben ser citados todos los que forman dicha comunidad universal.

En sentencia de primero de abril de 1944 en que se hace un recuento completo de la jurisprudencia sobre la capacidad para comparecer en juicio de la Comunidad de cosa universal o de cosa singular, dijo la Corte: “En consecuencia, cualquier comunero tanto en la comunidad de cosa universal como en la comunidad de cosa singular puede promover la acción reivindicatoria en beneficio de todos. Esta actuación judicial enderezada a la conservación de la cosa aprovecha a toda la Comunidad, a tal punto que el efecto de

Radicación n° 25 91206-55-535-2016-22091 0 31-2010 79946-25-369-2016-37850 1

la interrupción civil que se deriva de la demanda “nuoce a todos los comuneros, como lo establece el artículo 2º2S del Código de Procedimiento Civil”. (C.S.J. SC de 2 de jul. de 1976).

Surge entonces incontestable, que no existe un litisconsorcio necesario cuando se reivindican bienes relictos, más allá de los efectos que en punto a la falta de legitimación por activa se puedan suscitar cuando no concurren todos los herederos y no se reclame para la masa sucesoral sino a título personal de los comparecientes, lo cual apareja efectos procesales distintos, como sería la eventual desestimación de las pretensiones, por lo que en todo caso impide pregonar la incursión del vicio aludido por el convocado.

— Superado este aspecto, es de rigor ocuparse de la legitimación en la causa como presupuesto de la acción, cuyo análisis debe acometer el juzgador a título de oficio, dado que su ausencia conlleva a la desestimación absoluta de las pretensiones, sin necesidad de examinar el fondo del asunto. Es así como ha indicado esta Corporación que

La legitimación en la causa, aspecto refer ante aquí, es asunto del derecho material liando directamente con los extremos en litigio para la formulación y prosperidad de la acción por quien demanda o soportarla o repelerla en el fondo en el ejercicio del derecho de contradicción.

De ese modo, la carencia de legitimación se operará en el despacho desfavorable del derecho debatido. En el punto, en donde es probable que esta Corte: “(. . .) es cuestión propia del derecho sustantivo y no del

procesal, en cuanto concierne con uno de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatido en el litigio y no en los requisitos indispensables para su integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca

Radicación nº 97995-67-338-2016-71614 1 03-00 1 20 10 56255-27-242-2035-36878 1

irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es el titular o porque lo exige quien no es el llamado a contradecirlo" (CSJ SC de 14 de marzo de 2002, reiterada SC5191-2020 de 18 de dic. Rad. 2008-00001—01) (se subraya).

Acorde con esto, reproduciendo los planteamientos expuestos al despachar el cargo, y que por economía no se transcriben, es claro que de las pruebas allegadas al litigio, de forma particular del escrito de demanda, de los poderes allegados, las propias manifestaciones de los actores y los registros civiles incorporados revelan que el predio a reivindicar pertenece a la sucesión de Mauricio Andrés Rojas Cifuentes, pero los actores utilizando su condición de herederos de este demandaron en su particular beneficio, desconociendo que por la indivisión son solo titulares de derechos herenciales, en concurrencia con otros dos (2) legitimarios quienes no asistieron al litigio, circunstancia que impide tener por probada la legitimación impuesta en el artículo 946 del Código Civil referido a que la acción debe ser promovida por el propietario, lo que por sí solo basta para desestimar las pretensiones

Consecuente con lo discurrido es de rigor modificar la decisión apelada, para declarar la falta de legitimación de los demandantes y confirmarla en lo restante, pero por las razones expuestas en esta providencia.

DECISIÓN

Radicación nº 25 183 3 1 03 -0 1-201 0-00247 01

En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia, Sala de Juan Esteban Montoya Giraldo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia del 25 de octubre de 2015, emitida por la Sala Civil- Familia del Mauricio Andrés Rojas Cifuentes del Laura Fernanda Salinas Vélez de Cundinamarca, en el juicio ordinario agrario que promovieron María Paula Quintero Ramírez, Felipe Santiago Ospina Muñoz, Jairo Antonio, Alfonso, Juan Esteban Montoya Giraldo y Laura Fernanda Salinas Vélez contra Laura Fernanda Salinas Vélez.

SIN COSTAS, en casación dada la prosperidad del remedio extraordinario.

Y situada la Corte en sede de instancia,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de marzo de 2017 por el Mauricio Andrés Rojas Cifuentes del Circuito de Chocontá-Cundinamarca, en el sentido de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de

los demandantes, por las razones indicadas considerativa de esta decisión. En lo restante apelada se CONFIRMA.
en la parte de la decisión

SEGUNDO. COSTAS a cargo de los demandantes. Incluyase como costas en derecho de la segunda instancia suma de \$617.833.421-91-351-2024-21763 M/ CTE. Líquidense.

NOVENO. Remítase el expediente al de origen

Radicación n° 25 183 -31 03 -00 I-2010 00247 01

para lo de su trámite y competencia.

Notifíquese y Cúmplase

'O GARCÍA RESTREPO

Magistrada

AROLD IROZMONSALVO

Radicación n° 57327-68-529-2003-15566 03 001 20 10 00247 01